

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00253-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela promovido por la ciudadana **MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO** identificada con la C.C 1.030.649.212 contra **EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX**.

ANTECEDENTES

La ciudadana **MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO** identificada con la C.C 1.030.649.212 inicia acción de tutela contra **EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX** por considerar que se le está vulnerando los derechos fundamentales a la **DEBIDO PROCESO, PETICIÓN, EDUCACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN**.

HECHOS Y PRETENSIONES

Refiere que el día 19 de julio del año 2002 fue desplazada forzosamente junto con su familia por la violencia; y el 03 de septiembre de 2002 se reconoció como víctima del conflicto armado, tal como se puede evidenciar del registro único de víctimas (RUV), radicado bajo el No 231046 de declaración.

Señala que desde el año 2013 ha presentado ante el **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX** postulación para poder acceder a un crédito condonable mediante el Fondo para las Víctimas del Conflicto Armado, a efecto de dar continuidad a su carrera profesional.

Que, el 16 de mayo de 2020 realizó una solicitud formal al **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX**, radicada bajo el **CAS 7337051-H9R0V9** solicitando información sobre la situación actual de las postulaciones que ha realizado en anteriores ocasiones para acceder a los créditos condonables que ofrece para las personas en su condición pues cumple con los requisitos para acceder a la línea de crédito condonable denominado “*fondo víctimas del conflicto armado*”; por otra parte, cuál era el problema que presentaba para acceder a este beneficio y/o si es por falta del cumplimiento de algún requisito; siendo contestada por medio de chat y solicitándole datos que había aportado en los derechos de petición, además, redactara la solicitud.

Manifiesta ser una mujer joven desplazada por la violencia, madre cabeza de familia, de estrato bajo que desea continuar con sus estudios y actualmente va en 5 semestre del programa de derecho, viéndose afectada por la pandemia causada por la enfermedad Covid-19, pues perdió su empleo por lo que requiere que el **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX** le permita acceder al programa al que tiene derecho, al establecerlo la Ley 1448 de 2011 art. 51.

Indica que, para el primer semestre del año en curso, realizo postulación para el Fondo Víctimas del Conflicto Armado radicada bajo el No. 5308174 y al día de hoy no le han dado respuesta figurando en el sistema del ICETEX en estado “importada” significando que está en estudio, además, realizo el 07/07/2020 la postulación del segundo periodo radicada bajo el No. 5469745 figurando en la página del ICETEX no aprobada.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales invocados y se ordene al **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX** brinde una respuesta concreta frente a las múltiples solicitudes que ha elevado para la postulación como población vulnerable por ser desplazada de la violencia.

PRUEBAS

Derecho de petición con fecha del 16 de mayo de 2020, dirigido al ICETEX.

Respuesta dada al derecho de petición 05/05/2020 dirigido a la señora Maubren Yuliana Tafur Trujillo por parte del Icetex.

Respuesta dada al derecho de petición 2020/06/17 dirigido a la señora Maubren Yuliana Tafur Trujillo por parte del Icetex.

Respuesta al derecho de petición 01/07/2014 dirigido a la señora Alicia Alonso Muñoz por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Pantallazos de la página web del Icetex.

Resultados del estudio de su solicitud de crédito.

ACTUACIÓN PROCESAL

1.- Admitida la tutela el 11 de agosto de 2020, se ordenó la notificación del **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 12 de agosto de 2020, se notificó al **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.-El **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX**, procedió a contestar la acción constitucional dentro del término concedido por el Despacho Judicial.

CONSIDERACIONES

Aspectos preliminares

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

Naturaleza jurídica de la acción de tutela

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela.

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

En el caso bajo examen, la ciudadana **MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO** identificada con la C.C 1.030.649.212, se encuentra legitimada en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del artículo 86, que dispone: *“toda persona tendrá acción de tutela para reclamar, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”* observa el Despacho que el accionante está legitimado para interponer acción de tutela a nombre propio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, por ser el titular de los derechos invocados.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, el ICETEX, es una entidad financiera de naturaleza especial, propicia los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior; por lo que aquel se le endilga la vulneración de los derechos invocados toda vez que, según dicho del accionante, no ha procedido a dar contestación a las diferentes peticiones.

INMEDIATEZ

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que el accionante en su escrito de tutela, aludió que desde el 2013 ha presentado solicitudes ante el **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX** para poder acceder a un crédito condonable mediante el Fondo para las Víctimas del Conflicto Armado, a efecto de dar continuidad a su carrera profesional; petición que de manera formal se presentó el 16 de mayo de 2020, considerando la Juzgadora que el mecanismo subsidiario de tutela se interpuso dentro de un término razonable.

SUBSIDIARIEDAD

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa.

CONTESTACIÓN INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX.

La entidad accionada, refirió: “(...) EN CUANTO AL BENEFICIARIO DEL CRÉDITO. Revisadas las bases de datos del ICETEX, evidenciamos que la señora MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO identificada con la CC 1030649212 se presentó a la convocatoria 2014-1 del “FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO” para el programa de PROFESIONAL EN BANCA Y FINANZAS en la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA.

EN CUANTO A LA RESPUESTA DE LA PETICIÓN: Ahora bien, partiendo del contexto anterior de conformidad con el Reglamento del Fondo, damos respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: Para la convocatoria 2014-1 (no estaba registrado en el RUV (REGISTRO UNICO DE VÍCTIMAS), el cual es el requisito para todas las convocatorias, por lo tanto, no fue objeto de calificación.

SEGUNDO: revisadas las bases de datos del ICETEX, evidenciamos que la señora MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO identificada con C.C 1030649212 se presentó a la convocatoria 2014-2 del “FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA

Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO” para el programa de PROFESIONAL EN BANCA Y FINANZAS en la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA.

TERCERO: para la convocatoria 2014-2 tuvo la siguiente calificación: “CALIFICACIÓN PARCIAL 70. ESTADO: NO APROBADO”.

CUARTO: Ahora bien, para la convocatoria 2014-2 obtuvo 70 puntos y el punto de cohorte en la convocatoria departamento distrito Bogotá fue de 85 puntos, Así, no alcanzó a cumplir con el porcentaje necesario para ser beneficiario (a) del Fondo en la Convocatoria 2014-2, razón por la cual el resultado de la solicitud de crédito fue NO APROBADO.

QUINTO: revisadas las bases de datos del ICETEX, evidenciamos que la señora MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO identificada con la C.C 1030649212 se presentó a la convocatoria 2018-2 del “FONDO DE REPARACIÓN, PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO” para el programa de DERECHO en la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.

SEXTO: para la convocatoria 2018-2 tuvo la siguiente calificación (...) “Totales 54, 5”.

Que una vez verificadas las bases de calificación para la convocatoria 2018-2 se evidencia que la calificación obtenida fue de 54,5 y el punto de corte para el Departamento DISTRITAL CAPITAL fue de 60 puntos; Así, no alcanzó a cumplir con el puntaje necesario para ser beneficiario (a) del Fondo en la Convocatoria 2018-2, razón por la cual el resultado de la solicitud de crédito fue NO APROBADO.

Séptimo: revisadas las bases de datos del ICETEX, evidenciamos que la señora MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO identificada con C.C 1030649212 se presentó a la convocatoria 2019-1 del “FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO” para el programa de DERECHO en la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.

OCTAVO: Para la convocatoria 2019-1 tuvo la siguiente calificación: “Totales: 61,54”

Que una vez verificadas las bases de calificación para la convocatoria 2019-1 se evidencia que la calificación obtenida fue de 61,5 y el punto de corte para el departamento DISTRITAL CAPITAL fue de 70 puntos; Así, no alcanzo a cumplir con el porcentaje necesario para ser beneficiario (a) del Fondo en la Convocatoria 2019-1, razón por la cual el resultado de la solicitud de crédito fue NO APROBADO.

NOVENO: revisadas las bases de datos del ICETEX, evidenciamos que la señora MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO identificada con la CC 1030649212 se presentó a la convocatoria 2020-1 del “FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO” para el programa de DERECHO en la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA.

DÉCIMO: para la convocatoria 2020-1 tuvo la siguiente calificación: “TOTALES: 26,0”.

Una vez verificadas las bases de calificación para la convocatoria 2020-1 se evidencia que la calificación obtenida fue de 26 y el punto de corte para el departamento BOGOTA fue de 80 puntos; Así, no alcanzo a cumplir con el puntaje necesario para ser beneficiario (a) del Fondo en la Convocatoria 2020-1, razón por la cual el resultado de la solicitud de crédito fue NO APROBADO.

DÉCIMO PRIMERO: para la convocatoria 2020-2 tuvo la siguiente calificación: “TOTAL CALIFICACIÓN: 28”.

Que una vez verificadas las bases de calificación para la convocatoria 2020-2 se evidencia que la calificación del departamento del colegio Bogotá fue de 28 y el punto de corte para el departamento BOGOTA fue de 46 puntos; Así, no alcanzó a cumplir con el porcentaje necesario para ser beneficiario (a) del Fondo en la Convocatoria 2020 1, razón por la cual el resultado de la solicitud de crédito fue NO APROBADO.

(...)

Sumado a lo anterior, es preciso mencionar que el 14 de agosto de 2020 se remitió respuesta de fondo, clara y concisa al accionante, tanto al correo electrónico MTAFUR@ULAGRANCOLOMBIA.EDU.CO, y como a la dirección CR 95 A 54 F 02 SUR TR 6 AP 304 BOSA PORVENIR”.

Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado

Derecho Fundamental a la Educación.

La Constitución de 1991 contempla en su artículo 67 que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; *con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (...)*”.

Del artículo citado se evidencia que la educación tiene doble connotación. Como derecho, la educación se constituye en la garantía que propende por la formación de los individuos en todas sus potencialidades, pues a través de ésta el ser humano puede desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas, físicas, morales, culturales entre otras, y como servicio público, la educación se convierte en una obligación del Estado inherente a su finalidad social.

Por otra parte, en cuanto a las normas nacionales adoptadas en cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, la Ley 115 de 1994, “*Por la cual se expide la ley general de educación*”, en su artículo 1° establece que “*La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes*”.

Así mismo, en su artículo 5° esta ley expresa que: “*la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad (...). 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. La formación para facilitar la participación de todos en las*

decisiones que los afectan (...). 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley (...). 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos (...). 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país (...). 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional (...). 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica (...). 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales (...). 11. La formación en la práctica del trabajo (...). 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene (...). y 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”.

Derecho Fundamental de Petición

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional: “El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.

El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).

La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.

Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario

a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).

El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

El artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...”

El espíritu de la norma en cita, es la garantía con que cuenta toda persona o la sociedad, para pedir de las autoridades competentes la protección de su derecho de defensa, que le permitan una decisión en justicia, cuando éste se encuentre amenazado por actuaciones judiciales y administrativas ante la inobservancia del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad

de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.(sentencia C-31/14).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a esta juzgadora determinar si el **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX** vulneró los derechos invocados por la accionante, al no proceder a contestar el derecho de petición elevado el 16 de mayo de 2020, radicada bajo el **CAS 7337051-H9R0V9**, mediante el cual se solicitaba información sobre la situación actual de las postulaciones que ha realizado en anteriores ocasiones para acceder a los créditos condonables que ofrece para las personas en su condición al cumplir con los requisitos para acceder a la línea de crédito condonable denominado “*fondo víctimas del conflicto armado*”; por otra parte, cuál era el problema que presentaba para acceder a este beneficio y/o si es por falta del cumplimiento de algún requisito.

Al Despacho se arrió derecho de petición, del 16 de mayo de 2020, radicado bajo el No. CAS- 7337051-H9R0V9 dirigido al **INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR – ICETEX** mediante el que peticionó: “1. Solicito a ustedes muy respetuosamente que evalúen mi situación actual y que se estudie mi caso concreto para que me puedan otorgar el crédito condonable para las personas desplazadas por la violencia ya que soy un sujeto de mayor vulnerabilidad que requiero mayor protección por parte del estado colombiano.2.Solicito que se me informe las causas o motivos que ustedes tienen para negarme dicho crédito condonable en caso que no consideren viable mi solicitud.3.Cable resaltar, que siempre me he postulado cuando están vigentes las convocatorias y en las fechas indicadas por ustedes y así mismo no he recibido una respuesta concreta, idónea y por escrito del por qué, no puedo acceder a este crédito condonable.4. En el entendido, que para el semestre 2020 II se abren nuevas convocatorias para este crédito condonable quiero que se me notifique si debo aplicar nuevamente a esta convocatoria o si me debo sujetar a las inscripciones que ya he realizado, luego entonces si no obtengo una respuesta en términos legales me veo obligada a acudir a otras instancias judiciales ya que llevo 4 semestres realizando la misma solicitud sin obtener un resultado favorable y no he obtenido respuesta del porqué se me ha negado la solicitud. 5. Solicito ser notificada a través del correo electrónico, en los términos establecidos en la ley de acuerdo a la normatividad vigente”.

Ahora bien, en la contestación allegada por el ICETEX se dio respuesta a cada uno de los requerimientos efectuados por la peticionaria en su derecho de petición, precisándole porque para las convocatorias 2014-1 y 2, 2018-2, 2019-1, 2020-1 del “FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO” no fue aprobada su solicitud; y pese a la demora de la entidad para emitir respuesta a la contestación del

derecho de petición presentada por la accionante, ha de precisarse que conforme a los antecedentes descritos y la documental que obra en el plenario, ponen de presente que no hay lugar a proteger el derecho fundamental de petición y debido proceso invocado por la actora, pues, conforme a la respuesta de la entidad accionada, se advierte que el derecho de petición presentado ha sido contestado de forma y de fondo; aunado a lo anterior la contestación se puso en conocimiento de la señora Tafur Trujillo de manera física y además a través del canal digital que suministro en el derecho de petición; datos de notificación que coinciden con los informados en el escrito de tutela; configurándose así un hecho superado, desde el momento de interposición de la acción constitucional y el pronunciamiento del fallo.

Ahora, como quiera que la vulneración a los derechos fundamentales a la **EDUCACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN**, que pretende le sean de igual manera protegidos se deriva del no pronunciamiento de fondo en forma oportuna por parte del ICETEX, el Despacho se abstiene de ordenar su protección.

En virtud de lo anterior este Despacho Judicial, no advierte que la entidad accionada haya incurrido en acción u omisión que viole y/o ponga en riesgo los derechos invocados por la accionante.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por **MAUBREN YULIANA TAFUR TRUJILLO** identificada con la C.C 1.030.649.212, conforme a la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

TERCERO: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Librense comunicaciones.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 30 FAMILIA BOGOTÁ**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a8ba9cf309a8a6af7926518564f1e6f884be63b4f39c3d4041a69d5944faaa78
Documento generado en 25/08/2020 05:06:05 p.m.